


47 cuarenta  
Cuenca

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA LA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY




PRIMERA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY.

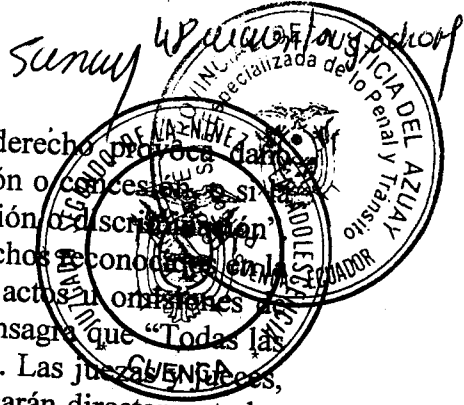
JUEZ PROVINCIAL PONENTE: DR. PAUL MALDONADO JERVES

Cuenca, 24 de noviembre del 2010.- Las 11h09

VISTOS. EL Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, dicta sentencia y concede la acción de protección planteada por ROSA VICTORIA TELLO SARMIENTO, en contra de la Dirección de Educación del Azuay, en la persona de su Directora la Lcda. María Eugenia Verdugo, por encontrar vulneración al derecho constitucional de motivación y de igualdad, como servidores docentes, Y dispone se proceda a la inmediata reparación económica de conformidad al artículo 19 de la Ley orgánica de garantías Jurisdiccionales y Control constitucional. De esta resolución interpone recurso de apelación la parte accionada, recurso que es concedido por el Juez de primer nivel, siendo el momento procesal para resolver se considera: PRIMERO: Jurisdicción y Competencia.- Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso interpuesto por la parte ACCIONADA al amparo del No. 3, inciso 2º del Art. 86 de la Constitución del Ecuador, en relación con el Artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y, en virtud del sorteo electrónico realizado conforme lo dispone el artículo 160 del Código Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO. VALIDEZ DEL PROCESO. La demanda de acción de protección de derechos se ha sustanciado observándose las normas constitucionales previstas para las garantías jurisdiccionales que señala el Art. 86 literales a) y b) de la Constitución de la República, del debido proceso y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sin que se haya omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, en razón de lo cual, se declara su validez. TERCERO. FUNDAMENTO DEL RECURSO. Los accionantes alegan que en la acción deducida "es completamente claro el RANGO CONSTITUCIONAL que la Asamblea Constituyente le otorgó en ese entonces a el Mandato Constitucional No 1; en su Art.1 " Poder Constituyente" que dispone: " La Asamblea Constituyente, por mandato popular del 15 de abril del 2007, asume y ejerce sus plenos poderes..." y el Art. 2, inciso segundo: " las decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del ordenamiento jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales , jurídicas y demás poderes públicos, sin excepción alguna.." Y por tanto el mandato Constituyente No 2 posee la misma jerarquía". Que los principios vulnerados e inobservados son los Arts. 326 num. 3 de la Carta Fundamental, que se vulnera además los artículos 424, 425 y 426. 82 Ibidem. CUARTO. PRETENSION DE LA ACCIONANTE.- ROSA VICTORIA TELLO SARMIENTO, dice que al habersele vulnerado sus derechos constitucionales solicita se adopten todas las medidas de reparación integral para remediar de manera inmediata las consecuencias de la ilegítima omisión por parte de la accionada al no cancelarle los rubros que determina el artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2, donde claramente establece que: "El monto de la indemnización, por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores públicos y personal docente del sector público, con excepción del perteneciente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será de hasta siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total"; que el Art. 2 del

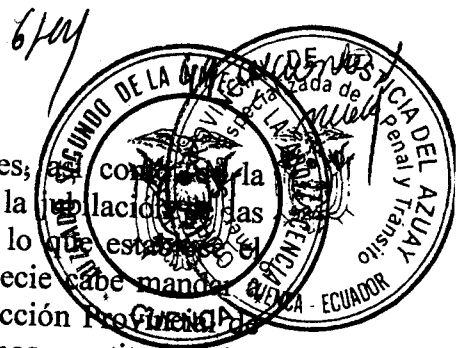


Mandato Constituyente No. 1 establece: "Las decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma de orden jerárquico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna". Que el espíritu del mandato fue que la Asamblea Constituyente debe contribuir a erradicar los privilegios remunerativos y salariales, eliminando las distorsiones generadas por la existencia de remuneraciones diferenciadas que se pagan en algunas entidades públicas o que se financian con recursos del sector público, a pretexto de su autonomía, se han fijado remuneraciones mensuales y salarios que violentan el principio básico de igual trabajo igual remuneración. Además que la Carta Fundamental en el capítulo Tercero garantiza los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, artículo 37 que reza sobre los derechos de los adultos mayores y que establece la "jubilación Universal" ó "igual jubilación en el sector público, igual liquidación", lo establecen también los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. El no acatar el Mandato Constituyente N: 2 vulnera lo que establece el numeral 2 del art. 11 de la Constitución, referente a la igualdad, a la seguridad jurídica. Pues como indican los accionantes, se les ha procedido a indemnizar por la jubilación a que tienen derecho, en la cantidad de doce mil dólares. QUINTO. AUDIENCIA PÚBLICA. La accionante se ratifica en su demanda advirtiendo que la parte accionada no reconoce los derechos del Mandato Constituyente Número 2, artículo 8. Que no se garantiza los derechos como establecen los artículos 37, 38 de la Constitución, que al presentar su renuncia y acogerse a la jubilación voluntaria, la Dirección Provincial de Educación del Azuay, procedió a realizarle la respectiva liquidación y transferencia en la cantidad de 12.000 dólares. La Dra. Ester María Jara Idrovo, a nombre de María Eugenia Verdugo, Directora Provincial de Educación del Azuay, dice que no se cumplen los requisitos para que proceda la acción de protección y debe declararse sin lugar la presente acción, que la pretensión de la actora debió demandarse en vía ordinaria ante el Tribunal Contencioso Administrativo; Dr. Fernando Astudillo, a nombre del Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Cuenca, expone que para la procedencia de la acción presentada debe haberse quebrantado un derecho de rango constitucional a través de un acto u omisión de autoridad pública y que éste conculque derechos constitucionales que se encuentren bajo el amparo directo y eficaz de la Constitución de la República, la omisión a que hace referencia por no otorgarle una indemnización acorde al inciso segundo del artículo 8 del Mandato Constituyente 2, no es materia de acción constitucional. Además que existe falta de legitimidad pasiva ya que esta causa se debió demandar al Procurador General del Estado, por ser el representante judicial del Estado ecuatoriano, por lo que se debe declarar la improcedencia, tampoco se cuenta con el legítimo contradictor la señora Ministra de Educación, por cuanto la Directora ejecuta lo que dispone la señora Ministra. Que los accionantes debieron agotar las vías administrativa o judicial previa o interponer la acción de incumplimiento, concluye que debe rechazar la demanda por ser improcedente. SEXTO. PRUEBA PRESENTADA. La Accionante ROSA VICTORIA TELLO SARMIENTO como prueba de su parte presentan: A fs. 1y 2, la acción de personal con el cargo de Director encargado-profesor, categoría Décima 40% urbana; y la certificación del Jefe Provincial de Escalafón que determina 39 años de servicio de los cargos docentes desempeñados. De conformidad a lo que establece el artículo 86.3 de la Constitución "Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información" por su parte la accionada nada en contrario ha demostrado. SÉPTIMO: MARCO CONSTITUCIONAL.- El Art. 88 de la Constitución de la República, imperativamente dispone que "La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la



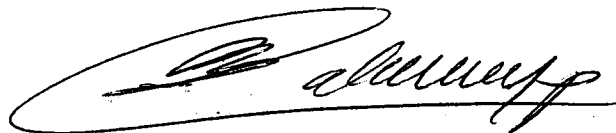
violación proceda de una persona particular, si la violación de derecho es grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o Por tanto, esta acción procede: a) cuando existe vulneración de derechos Constitución; y, b) cuando estos derechos se hayan violado por actos cualquiera autoridad pública no judicial. El artículo 426 ibídem, consagra personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución y las partes no las invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos". La reclamación en la especie no debe ser entendida como hace la defensa de la parte accionada que debe agotarse los trámites administrativos o judiciales para alcanzar la vía constitucional, aquello rompería la esencia de esta garantía constitucional- el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y el trámite sencillo, rápido y eficaz. OCTAVO: El espíritu del Mandato Constituyente pretende eliminar todas esas inequidades y desigualdades que se daban anteriormente entre las instituciones públicas, ese fue el verdadero espíritu de este Mandato, establecer igualdad entre todos los trabajadores públicos, o sea "Igual trabajo, igual remuneración" o "igual año de servicio, igual indemnización", de ahí la obligatoriedad de aplicar la disposición del artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2, que claramente establece: "El monto de la indemnización, por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores públicos y personal docente del sector público, con excepción del perteneciente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será de hasta siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total", El artículo 2 del Mandato Constituyente No. 1 establece: "Las decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma de orden jerárquico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna". El 18 de enero de 2010, el Sr. Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo No. 225 en su Artículo 6 RATIFICÓ Y CONFIRMÓ el artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2 cuando expresamente manifiesta que "en casos de supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación "...se reconocerán estos beneficios económicos en caso que no sobrepasen los límites establecidos en los Mandatos Constituyentes 2 y 4...". La Accionante, al verse vulnerados sus derechos constitucionales acude a la justicia pidiendo que se adopten todas las medidas de reparación integral que remedien de manera inmediata las consecuencias de la ILEGÍTIMA OMISIÓN, disponiendo que la parte accionada "inmediatamente efectúe la reliquidación y el pago a favor de la compareciente de las indemnizaciones constantes en el artículo 8 inciso primero del Mandato Constituyente No 2. Debiendo considerarse los años de servicio institucional de la actora y el salario mínimo básico unificado del trabajador privado en el año 2009 (\$218,00) año en que la accionante terminó su relación laboral con la Dirección Provincial de Educación del Azuay, conforme consta de la documentación presentada. El Mandato Constituyente 2, promulgado en el R.O. 261 del 28 de enero de 2008, considera que la Asamblea Constituyente representa a la soberanía popular que radica en el pueblo ecuatoriano, y por su propia naturaleza está dotada de plenos poderes para aprobar "Mandatos Constituyentes" de aplicación inmediata y obligatoria como "las entidades educativas públicas de cualquier nivel", dice el Art. 2 j)

de este Mandato; y, su artículo 8, taxativamente, regula: "...Liquidaciones e indemnizaciones. El monto de la indemnización, por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores públicos y personal docente del sector público, con excepción del perteneciente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será de hasta siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total". Para el efecto, la accionante se encuentra inmersa en este beneficio por haber cumplido 39 años de servicio como profesores en las categorías que se señalan en la documentación acompañada. Por consiguiente, no se puede restringir el contenido de los derechos ni de las garantías proclamados en tales Mandatos y la Carta Fundamental. El ejercicio de los derechos y garantías, se rigen por los principios regulados en el artículo 11 de la Constitución de la República que la Sala está en la obligación de garantizar su cumplimiento. Es imperativo aplicar lo enunciado en los Mandatos Constituyentes 1 y 2 expedidos por la Asamblea Constituyente, legítima representante de la voluntad soberana del pueblo; y el Decreto Ejecutivo que reforma al "Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional", artículo 1 que sustituye el número 2 del artículo 115 por el siguiente: "2. Al profesional de la Educación que se acoja a la jubilación se le otorgará: condecoración al mérito educativo, licencia con sueldo por sesenta días para los trámites correspondientes y una bonificación económica de acuerdo con las tablas establecidas por los años de servicio y edad, para que no se vulneren además derechos fundamentales que establece la Carta Fundamental en los artículos 35, 36, 37.3, 38.2.9, sobre derechos de la personas y grupos de atención prioritaria; y los principios que rigen para el ejercicio de los derechos previstos en la normativa constitucional: artículos 11 numerales 1, 3, 4 y 5; 82, 424, 425 y 426. En la especie, aunque las reclamaciones hechas por los accionantes, aparentemente parecerían como peticiones sobre derechos meramente patrimoniales y sobre todo de simple administración; analizando las misma se establece que los derechos reclamados por la accionante no corresponden a mera legalidad y se insertan en la dimensión sustancial de los derechos constitucionales, pues, no implica un simple menoscabo en el patrimonio de la accionante, sino de una lesión en la actividad laboral que la accionante ha venido desempeñando, no de manera circunstancial ni secundaria, sino por el contrario, se trata de una actividad que ha ejercido a lo largo de su desempeño formal como Profesional y sobre el cual ha entregado todo su talento durante toda su vida laboral formal, lo que ha sido parte de su personalidad misma.- Por tanto se trata de hechos que dicen relación con cuestiones atinentes al desarrollo de su propia personalidad, pero sobre todo, tiene que ver con la contraparte material (remuneración, valores monetarios) a la que tiene derecho a acceder como consecuencia de haber prestado sus servicios a la administración pública, al Ministerio de Educación en particular y al Estado mismo. De ahí que corresponde proteger aquella indemnización, debiendo entenderla no solamente como valor monetario, sino como sustancia y componente esencial de la remuneración a la que tienen derecho aquellos que ponen el servicio de otro estamento su talento y fuerza espiritual y mental o física; no existe trabajo sin la remuneración correspondiente así establece nuestra Carta Fundamental. No garantizar la petición de la accionante sería poner en duda la dignidad humana y su derecho a recibir una recompensa como retribución a la prestación de sus servicios y de esa forma reconocer en la mayor medida posible el talento tomado por la administración pública y la plusvalía que de esta se deriva, la cual es tomada por la institución empleadora. De ahí que la normativa nacional como internacional se orienta a proteger los derechos de las personas para que tengan un nivel de vida adecuado, con seguridad en sus necesidades básicas, que la Constitución en el inciso 3 del artículo 275 lo ampara como una categoría constitucional del "BUEN VIVIR" (Sumak Kausay). Más aún si la accionante es una persona adulta mayor y ha ejercido el cargo de educadora del sector público. NOVENO.- RESOLUCIÓN.- Si bien la Directora Provincial de



Educación, cumplió con su obligación de cubrir las remuneraciones, liquidación respectiva de DOCE MIL DOLARES a propósito de la liquidación de los accionantes, más lo hace de forma incompleta, pues no se sujeta a lo que establece el Artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2. Por lo que en la especie cabe mandar a la Dirección Provincial de Educación y/o Ministerio de Educación a fin de garantizar los derechos constitucionales de la accionante; es decir el límite establecido por el propio constituyente de Montecristi, no cabe duda que deben acceder al límite de doscientos diez salarios (210), por treinta años de servicio, para lo cual se considerará lo ya recibido (USD 12.000) y evitar que reciba una cantidad superior a la merecida, pues no cabe duda que los mandatos constituyentes tienen el rango de norma constitucional, por lo tanto de cumplimiento directo e inmediato. "La justicia constitucional procura, esencialmente, la preservación de los derechos individuales constitucionalmente protegidos y de la organización política del Estado, incluyendo el ejercicio de las funciones que atribuye la Ley Fundamental a los órganos creados por la misma para su fiel cumplimiento y aplicación, lo que trae consigo el debido control y vigilancia de la supremacía de la Constitución, en todos los órdenes" (Apuntes sobre la Justicia Constitucional de Rafael Luciano Pichardo y José E. Hernández Machado), por lo que haciendo justicia constitucional la Sala, en mérito de lo expuesto y de conformidad con el Art. 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, "ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", se niega el recurso interpuesto y se confirma íntegramente la sentencia subida en grado; disponiendo que la parte accionada proceda a realizar la reliquidación y el pago de los valores a favor de los accionantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso primero del Mandato Constituyente No. 8, publicado en el Registro Oficial No. 261 del 28 de enero del 2008; tomando en consideración para la reliquidación: A) un valor (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio, esto en razón que la Sala considera que hay que aplicar lo más favorable para la accionante de conformidad con el art. 11 numeral dos y con ello evitar su discriminación; y B) La cantidad de doce mil dólares que ya ha recibido la accionante. Para ello se le concede al accionado el término de veinte días.- De conformidad con el numeral 5 del Art. 86 de la Constitución y el numeral y del Art. 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ejecutoriada esta sentencia, remítase copia certificada de esta sentencia a la Corte Constitucional. Sin Costas. Con el ejecutorial, devuélvase el proceso al Juzgado de Origen- En virtud de la acción de personal No. 172-DDCNJA-08, actúe la Dra. María Lorena Palacios como Secretaria Relatora Interina.- Notifíquese. F) DR. JOSE RICARDO SERRANO GONZALEZ JUEZ PROVINCIAL F) DR. ARTURO CORONEL DIAZ JUEZ PROVINCIAL F) DR. PAUL MALDONADO JERVES CONJUEZ DE LA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY.- En Cuenca, miércoles veinte y cuatro de noviembre del dos mil diez, a partir de las once horas y cuarenta y cinco minutos, mediante boletas judiciales notifiqué con el auto que antecede a: TELLO SARMIENTO ROSA VICTORIA en el casillero No. 1070 del Dr./Ab. POZO VIDAL XAVIER. LICENCIADA MARIA EUGENIA VERDUGO GUAMAN DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACION DEL AZUAY en el casillero No. 575 del Dr./Ab. JARA IDROVO ESTHER MARIA. DR. CESAR AUGUSTO OCHOA BALAREZO DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL AZUAY en el casillero No. 522 del Dr./Ab. ASTUDILLO NIVELIO RICARDO FERNANDO. Certifico: F) Dra. María Lorena Palacios P. Secretaria Relatora Interina de la Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay

PALACIOSL



PRIMERA SALA ESPECIALIZADA  
DE LO PENAL Y TRÁNSITO

CERTIFICO: Que las *tres hojas*  
~~son~~ fiel copia de su original.

Cuenca, *28 Dic 2010*



**Dra. María Lorena Palacios P.**

SECRETARIA RELATORA INTERINA  
DE LA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA  
DE LO PENAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE  
PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY



EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA LA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY



PRIMERA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY. Cuenca, 21 de diciembre del 2010.- Las 08h10

VISTOS: En virtud de la ampliación solicitada por la accionante ROSA VICTORIA TELLO SARMIENTO , cuanto por el Dr. César Augusto Ochoa Balarezo Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Cuenca, esta Sala considera: Que al indicar en la parte resolutive de la sentencia textualmente: "desechando el recurso de apelación interpuesto, confirma la sentencia recurrida", indudablemente significa que la confirmatoria del fallo de primera instancia es en todas sus partes.. En lo concerniente a la ampliación solicitada por el señor Representante de la Procuraduría General del Estado , no cabe en el presente proceso, toda vez que en virtud del Mandato Constituyente 2 Art. 8 inciso primero de forma clara y precisa determina el monto de la indemnización y su máximo pago. De la misma manera que no procede ampliación en cuanto al aludido Art. 20 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues la sentencia de esta Sala es clara y no se ha determinado quién sea responsable de no aplicar adecuadamente el mandato Constituyente No. 2.. De esta manera se provee lo solicitado por los impugnantes, a fin de que no haya la menor duda de lo que se resolvió Siga actuando la Secretaria Relatora Interina Notifíquese.- F) DR. JOSE RICARDO SERRANO GONZALEZ JUEZ PROVINCIAL F) DR. ARTURO CORONEL DUAZ JUEZ PROVINCIAL F) DR. PAUL MALDONADO JERVES CONJUEZ DE LA PRIMERA SALA PENAL En Cuenca, martes veinte y uno de diciembre del dos mil diez, a partir de las ocho horas y veinte minutos, mediante boletas judiciales notifiqué con la providencia que antecede a: TELLO SARMIENTO ROSA VICTORIA en el casillero No. 1070 del Dr./Ab. POZO VIDAL XAVIER. LICENCIADA MARIA EUGENIA VERDUGO GUAMAN DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACION DEL AZUAY en el casillero No. 575 del Dr./Ab. JARA IDROVO ESTHER MARIA. DR. CESAR AUGUSTO OCHOA BALAREZO DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO EN EL AZUAY en el casillero No. 522 del Dr./Ab. ASTUDILLO NIVELLO RICHA FERNANDO. Certifico: f) Dra. María Lorena Palacios Secretaria Relatora Interina.-

PALACIOSL

*[Handwritten Signature]*  
**Dra. María Lorena Palacios P.**  
SECRETARIA RELATORA INTERINA  
DE LA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA  
DE LO PENAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE  
PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY

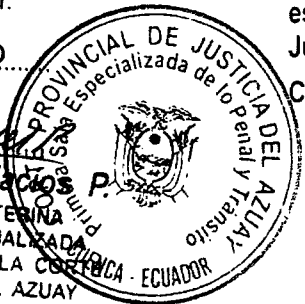


PRIMERA SALA ESPECIALIZADA  
DE LO PENAL Y TRÁNSITO

CERTIFICO: Que la...*R.O.J.A.*.....  
es fiel copia de su original.

Cuenca, *28 Dic 2010*

*[Handwritten Signature]*  
**Dra. María Lorena Palacios P.**  
SECRETARIA RELATORA INTERINA  
DE LA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA  
DE LO PENAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE  
PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY



PRIMERA SALA ESPECIALIZADA  
DE LO PENAL Y TRÁNSITO

RAZÓN: Dejo constancia que en esta fecha se libró ejecutorial al Juzgado /Tribunal de origen.

Cuenca, *28 Dic 2010*

*[Handwritten Signature]*  
**Dra. María Lorena Palacios P.**  
SECRETARIA RELATORA INTERINA  
DE LA PRIMERA SALA ESPECIALIZADA  
DE LO PENAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE  
PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY

No. 01952-2010-0414

Presentado en el día de hoy martes veinte y ocho de diciembre del dos mil diez, a las quince horas y cincuenta y ocho minutos. Adjunta: REMITIDO DE LA CORTE PROVINCIAL EN CINCUENTA FOJAS. Certifico.



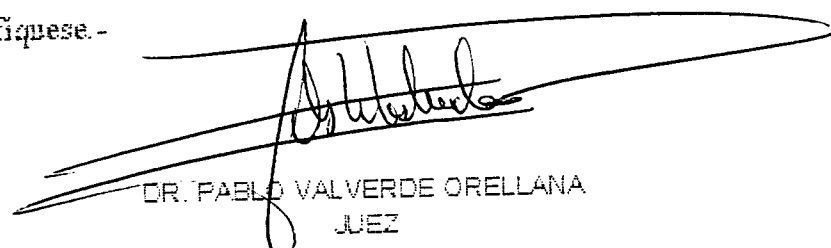
---

DRA. JANETH JUAREZ  
SECRETARIA AD HOC

JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE CUENCA. Juicio N° 0414-10

Cuenca, 29 diciembre de 2010; las 08H42

Se pone en conocimiento de las partes la recepción del proceso, con el ejecutorial de la Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay. Por licencia del señor secretario de la judicatura por vacaciones, se nombra como secretaria ad-hoc a la Dra. Janeth Juárez, que presente acepta el cargo y firma para constancia. Notifíquese. -



DR. PABLO VALVERDE ORELLANA  
JUEZ

En Cuenca, miércoles veinte y nueve de diciembre del dos mil diez, a partir de las once horas y cuarenta y nueve minutos, mediante boletas judiciales notifiqué con la providencia que antecede a: TELLO SARMIENTO ROSA VICTORIA en el casillero No. 1070 del Dr./Ab. POZO VIDAL XAVIER. DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DEL AZUAY en el casillero No. 575 del Dr./Ab. JARA IDROVO ESTHER MARIA. DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO en el casillero No. 522 del Dr./Ab. ASTUDILLO NIVELLO RICAR FERNANDO; TELLO SARMIENTO ROSA VICTORIA en el casillero No. 733 del Dr./Ab. MENDEZ ALVAREZ ALVARO. Certifico:

CEDILLOP

